



Margarita Estrada Iguíniz  
Pascal Labazée  
(coordinadores)

# **GLOBALIZACIÓN Y LOCALIDAD: ESPACIOS, ACTORES, MOVILIDADES E IDENTIDADES**

PUBLICACIONES DE LA CASA CHATA

338.91

G623g Globalización y localidad : espacios, actores, movilidades e identidades /  
Margarita Estrada Iguíniz y Pascal Labazée, coordinadores ; Claude  
Bataillon, prólogo. -- México, D.F. : Centro de Investigaciones y  
Estudios Superiores en Antropología Social : Institut de recherche  
pour le developpement, 2007, 615 p. maps. 23 cm --  
(Publicaciones de la Casa Chata)

Incluye bibliografía

ISBN 968-496-595-8

ISBN 978-968-496-595-9

1. Globalización - Aspectos sociales. 2. Globalización - Aspectos  
económicos. 3. Industria textil. 4. Migración Internacional. 5. Maquiladoras  
-- México. 6. Pobreza -- México. I t. II. Estrada Iguíniz, Margarita,  
coord. III. Labazée, Pascal, coord. IV. Bataillon, Claude, prol. V. Serie.

Edición al cuidado de Armando López Carrillo  
Corrección de Beatriz Marcela Stellino Martínez  
Diseño de portada de Gabriel Salazar Enciso

Primera edición: 2007

© Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,  
Hidalgo y Matamoros s/n, Col. Tlalpan, C.P. 14000, México, D.F.  
difusion@juarez.ciesas.edu.mx

© Instituto de Investigaciones para el Desarrollo  
Calle Cicerón 609, Col. Los Morales 11530, México, D.F.  
ird@irdmex.org

ISBN 978-968-496-595-9

Impreso y hecho en México

# Gobiernos de alternancia y buen gobierno en México

*Víctor Alejandro Espinoza Valle*

Departamento de Estudios de Administración Pública,  
El Colegio de la Frontera Norte

En este breve trabajo pretendo hacer una primera reflexión en torno a asuntos torales de la cultura democrática, básicamente desde la experiencia mexicana. Nuestra muy joven y singular democracia, es incapaz de generar una cultura política que reconozca, en el desempeño de sus instituciones, el piso desde el cual se pueda combatir la corrupción y el mal gobierno. Los gobiernos de alternancia y los divididos, poco han podido permear las concepciones ciudadanas como para pensar que estamos en un momento radicalmente distinto al que vivíamos en la época del partido hegemónico. En cuatro apartados desarrollo las anteriores hipótesis, que son sólo eso: puntos de partida para la reflexión sobre nuestra ansiada consolidación democrática.

## DEMOCRACIA, ÉTICA Y BUEN GOBIERNO

Tengo la impresión de que las alternancias mexicanas no han calado en la cultura política, de tal manera que la opinión de los ciudadanos acerca de las bondades de los gobiernos emanados de partidos de oposición, se hayan modificado significativamente respecto a la forma en que eran concebidas las administraciones públicas priístas. Formalmente, la democracia debería ir acompañada de una mayor responsabilidad gubernamental y de una ética de servicio al margen de la corrupción y el mal gobierno. La rendición de cuentas sería un activo fijo de la nueva gestión pública.

Si la democracia mexicana reconoce en los procesos electorales su palanca primordial, ya que aquélla se fraguó en las urnas y a través de batallas electorales, en ello residen gran parte de las explicaciones a la forma como se han ido modificando las instituciones públicas. La dificultad para fijar una fecha de inicio y

término de la transición, informa de las singularidades de nuestro salto del régimen autoritario a otro moderno y democrático. Lo cierto es que los acuerdos no existen como práctica para imaginar nuestras formas de convivencia. No es menor el hecho de que no reconozcamos momentos fundadores o culminantes de los procesos. A principios de los años noventa, Soledad Loaeza publicó un artículo que es fiel reflejo de esa situación: "La incertidumbre política mexicana".<sup>1</sup> Se preguntaba si la prolongada transición no tendría alguna de las dos salidas clásicas: democracia o regresión autoritaria. Como siempre, éramos tan singulares que a lo mejor nuestro proceso de liberalización política tenía una lógica propia y hasta ahí llegaríamos. Pero, de pronto, encontramos el camino: otra vez fue a través de las urnas cuando nos convertimos en habitantes de un país democrático. Para unos fue en 1997, otros lo fechan en el año 2000. De nuevo no nos ponemos de acuerdo. No nos hagamos bolas: somos democráticos porque el PRI perdió en las urnas; nunca por habernos puesto de acuerdo en sobre qué rumbo deberían seguir las instituciones.

A propósito de unos comicios estatales, un senador del PAN me comentaba que buen gobierno era aquel que hacía lo que la gente quería. ¿Pero qué es lo que quieren los mexicanos? En los tiempos del autoritarismo no estoy seguro de que todos fueran malos gobiernos. Entre 1954 y 1970, en la época conocida como el "milagro mexicano", el crecimiento sostenido permitió mantener un sistema corporativo funcional que entre los extremos sociales hizo crecer una extensa clase media y que le permitió gobernar con relativa tranquilidad y consenso. Eso sí, la oposición minoritaria fue perseguida y estigmatizada. La mosca en la sopa desde luego era la extendida corrupción que no sólo abarcaba al gobierno, sino que pasaba por toda la sociedad y medios de comunicación incluidos. En el exterior algunos países suspiraban por imitar nuestro exitoso sistema. Pero todo por servir se acaba.

Las sucesivas crisis económicas que tuvieron lugar a partir de 1976 dieron al traste con el sistema político mexicano. Dicho de manera muy esquemática: se acabaron los recursos para repartir a todos y acallar las conciencias. Los recursos públicos que fluían en todas direcciones escasearon en la etapa de la racionalidad del gasto. Nos dimos cuenta de que la corrupción no era un problema moral sino de acumulación de capital. Lo poco que quedó –por supuesto comparado con el pasado– exigió un manejo diferente y más focalizado. Ahora la corrupción sería administrada prefe-

<sup>1</sup> Soledad Loaeza, (1993: 47-59).

rentemente por los grandes operadores y a través de otro tipo de acciones: manejo confidencial de información para la oportuna toma de decisiones; desvío de fondos públicos para campañas políticas; transferencias de cuentas en el extranjero, etc. Sin embargo, el proceso de rectificación y combate a la corrupción provino de los mismos gobiernos emanados del PRI. A partir de 1976, José López Portillo acuñó la frase inmortal: "La corrupción somos todos", para que el rutilante Miguel de la Madrid nos endilgara un programa de gobierno basado en la "renovación moral de la sociedad". Carlos Salinas y Ernesto Zedillo prefirieron crear instancias para que el gobierno se autovigilara: así surgió la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, de cuya existencia dudó Vicente Fox y terminó por mandar a ella a uno de sus más cercanos colaboradores.

Cuando los recursos económicos escasean, los defectos gubernamentales son más visibles. Es como el pretendiente que se queda sin capital: la muchacha pronto se da cuenta de que además era bastante feo. Es mucho más difícil gobernar en tiempos de crisis. A nadie agrada que el gran benefactor se quede sin recursos. Para las nuevas administraciones la escasez obliga a racionalizar y focalizar los gastos. La nueva ética política requiere que la honestidad no esté en duda. Incluso, buena parte de las campañas se basan en pregonar una lucha sin cuartel contra la corrupción y los malos funcionarios: los "peces gordos" se mueven nerviosos. Como cita María del Carmen Pardo, "El buen gobierno sería aquel que pueda simultáneamente mantener la legitimidad moral y democrática y promover el desarrollo socioeconómico".<sup>2</sup>

En la metodología desarrollada para evaluar el desempeño gubernamental se ha puesto el acento en cinco aspectos básicos: eficacia, eficiencia, responsabilidad o desempeño responsable, atención a las demandas ciudadanas, aceptación o promoción de la participación-impulso a la participación ciudadana.<sup>3</sup> Dicho de manera muy simple, los primeros tres elementos para configurar un buen gobierno son un poco más manejables: eficiencia, eficacia y responsabilidad. Bueno, esto último con todas sus salvedades. Sin embargo, tanto respecto a la atención a las demandas como a la promoción de la participación ciudadana, las cosas no son tan sencillas como quisiéramos. En un congreso internacional convocado por el Instituto Electoral del

<sup>2</sup> María del Carmen Pardo, *Ética y democracia: un binomio indivisible*, El Colegio de México, mimeo, p. 6.

<sup>3</sup> Véanse Alicia Ziccardi y Homero R. Saltalamacchia (1997: 36) y Juan Manuel Ramírez Sáiz (coord.), (1998: 247-274).

Distrito Federal en 2002,<sup>4</sup> Manuel Antonio Garretón llamaba la atención respecto a los constreñimientos gubernamentales para hacer lo que la gente quiere, es decir, para responder a las crecientes demandas. Los gobiernos nacionales, y en esa lógica, de manera más clara los gobiernos locales, cada vez dependen más de factores externos para impulsar sus programas. Las decisiones de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, imponen los lineamientos básicos de lo que deben ser y hacer las administraciones públicas. El margen de maniobra nacional se ha estrechado. Así, dice Garretón, la política ha dejado de ser un asunto doméstico. Por mucho que se quiera ampliar, por ejemplo, el gasto social, los límites son evidentes. Así, ¿quién puede encabezar un buen gobierno?

El segundo asunto, el de la promoción de la participación social, es ciertamente polémico. Hay quien piensa que el “capital social” es una ilusión (Manuel Antonio Garretón). Para otros, son sólo “moños democráticos”<sup>5</sup> que pertenecen a un discurso que pretende vestir bien a la democracia. En ese contexto se inscribe todo el impulso por normar la participación ciudadana, ya sea mediante consultas públicas o a través del diseño institucional. Los candidatos de oposición al PRI han incorporado a su discurso, casi sin excepción, la idea de que todo gobierno de alternancia tiene que promulgar leyes de participación ciudadana. Al convertirse en gobierno, prácticamente todos han cumplido. Perredistas y panistas. Sin embargo, las mismas adolecen de diversos problemas: desde el caso que no establecen obligaciones vinculatorias a los gobiernos, hasta la falta de normas reglamentarias para llevar a la práctica los diversos mecanismos: referéndum, plebiscito, iniciativa ciudadana, revocación del mandato, etc. Así, con excepción del plebiscito del Distrito Federal celebrado durante la administración de AMLO –2000-2005–, en el resto de las entidades, las leyes de participación ciudadana son letra muerta y se les recuerda por su eficacia electoral. Los comités de planeación del desarrollo se han convertido en verdaderos centros burocráticos que han ahuyentado a los ciudadanos.

<sup>4</sup> Instituto Electoral del Distrito Federal (2002).

<sup>5</sup> Jesús Silva-Herzog Márquez (1998: 139).

## GOBIERNOS DIVIDIDOS Y BUEN GOBIERNO

Con asombro vamos descubriendo cómo el fenómeno de los gobiernos divididos no era lo que habíamos imaginado. La panacea democrática de los gobiernos donde el poder se comparte entre los poderes ejecutivo y legislativo no parece ser lo que indicaban los textos de teoría política. No en el caso de México. Si en 1997 el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, producto de las elecciones del año 2000, el PAN no pudo obtener los escaños necesarios en ambas cámaras como para permitirle un gobierno más manejable al presidente Vicente Fox; lo mismo sucedió en 2003.

Realmente la experiencia de los gobiernos divididos inició en México en 1989 en el norteño estado de Baja California. Ahí, en la frontera con California, se inauguró la alternancia política, once años antes que a nivel federal. Sería bueno a veces desviar la mirada hacia las localidades para entender la dinámica de nuestro país. Los resultados de prácticamente quince años –con excepción del trienio 1995-1998– de gobiernos divididos en Baja California, dan cuenta de lo tortuoso y difícil que puede ser gobernar en democracia. Más cuando dos tradiciones de nuestra cultura política acechan los márgenes de la gobernabilidad. Me refiero, por un lado, a la incapacidad para generar acuerdos, primero entre los poderes ejecutivo y legislativo, y después entre las fracciones en el Congreso. No es casual el distanciamiento entre el presidente Fox y la legislatura. Más bien la tónica en estos tres últimos años ha sido de enfrentamiento y desencuentro. El ejemplo lo tenemos en las declaraciones del presidente en su más reciente viaje a Europa donde criticó que los diputados vean más por los intereses partidarios que por los de sus representados. Resulta evidente que Fox no ha priorizado los acuerdos con el Congreso para avanzar en las reformas que le permitan mayor margen de maniobra gubernamental. Pero a estas dificultades se suma la incapacidad de las fracciones en el legislativo por avanzar en un mínimo acuerdo sobre los temas relevantes de la agenda legislativa. No hay el deseo, pero tampoco el aprendizaje que da la tradición democrática, de gobernar con base en acuerdos y no en imposiciones o mayoriteos. Fueron muchos años de partido hegemónico donde los legisladores hacían todo menos representar a nadie, salvo al presidente y a su partido. Verbos como concertar, acordar, negociar, no existían en el léxico de la política mexicana. Los partidos de oposición efectivamente sólo se oponían a la política gubernamen-

tal, no se preocupaban por entender el ejercicio de gobierno, de pensar en positivo para generar políticas plausibles.

El otro factor que conspira contra la política de acuerdos es, sin duda, la tradición de los medios de comunicación por estigmatizar el hecho de que los partidos se sienten a negociar. En su visita a nuestro país, el brillante sociólogo español, Ludolfo Paramio, nos hacía ver esta característica de los medios en México. Decía que la expresión “negociar en lo oscuro”, era de patente nacional. Efectivamente, hemos aprendido a ver con recelo toda negociación a puerta cerrada entre poderes distintos y partidos de adversarios. La connotación de lo “en oscuro” es la de transar. Nos olvidamos que es una práctica de todo régimen democrático llegar a acuerdos prácticos ante situaciones complejas. Aquí lo vemos con morbo. Claro, atrás vienen las “concertaciones” inauguradas justamente en el estado del presidente en 1992. Hay elementos que lo explican, pero que ya no lo justifican.

#### ALTERNANCIA Y BUEN GOBIERNO

Después de quince años de iniciado el fenómeno de alternancia a nivel estatal, el mapa político mexicano incluye 15 gobiernos de alternancia: 7 del PAN, 5 del PRD y 3 de coaliciones. Es decir, casi la mitad del territorio nacional se encuentra bajo administraciones estatales distintas al PRI. Este partido sigue conservando el poder en 17 entidades. El gobierno de más larga data es el de Baja California donde desde 1989 conserva el poder el PAN y los más recientes (2001) son los de Michoacán y Yucatán, donde gobierna el PRD, en el primero de ellos, y una coalición PAN-PRD-PT-PVEM, en el segundo.

En el verano de 2001 Transparencia Mexicana solicitó la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2001 (ENCYBG, 2001), que efectivamente contó con representación para las 32 entidades y donde fueron aplicados 13 790 cuestionarios. Se tomaron los 38 servicios públicos considerados como los más relevantes. Lo que registra la encuesta son los niveles de corrupción en los servicios ofrecidos por los tres órdenes de gobierno y por particulares. Los registros se hicieron cuando el entrevistado declaró haber dado “mordida” a cambio de obtener el servicio. Para ello se construyó el Índice de Corrupción y Buen Gobierno (ICBG) con una escala de 0 a

100, que indica que a menor valor menor corrupción.<sup>6</sup> Como resume el actuario Roy Campos: “La encuesta registró casi 214 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos en los últimos 12 meses. En promedio las ‘mordidas’ costaron a los hogares mexicanos \$109.50. Lo anterior implica más de 23 400 millones de pesos anuales en pagos de mordidas por servicio público a los hogares. Los hogares que reportan ‘mordidas’ destinan 6.9% de su ingreso a este rubro. Para los hogares con ingresos de hasta un salario mínimo, este impuesto regresivo llega a representar 13.9% de su ingreso”.<sup>7</sup>

Como puede verse en el cuadro 1, los promedios del índice son muy similares en entidades con y sin alternancia. Si recordamos que las respuestas incluyen tanto a los tres órdenes de gobierno como al sector privado<sup>8</sup> no deja de llamar la atención entonces que los niveles de corrupción no han sido abatidos por los gobiernos no priístas o, si se quiere, que el combate a la corrupción ha sido similar a lo largo de la geografía nacional, independientemente de quien se encuentre en el poder. Esto se comprueba al observar qué entidades ocupan los primeros y últimos lugares en el ICBG. Respecto a las entidades con menor nivel de corrupción destacan Colima (3.0), Baja California Sur (3.9), Aguascalientes (4.5), Coahuila (5.0) y Chihuahua (5.5). Es decir, el estado menos corrupto es gobernado por el PRI y nunca ha conocido la alternancia. Baja California Sur es un gobierno perredista desde 1999, mientras que Aguascalientes es gobernado por el PAN desde 1998. Coahuila ocupa el cuarto lugar y tampoco ha conocido el fenómeno de alternancia. Por último, es de destacar el caso de Chihuahua, única entidad que registra una doble alternancia. En 1992 se apuntó el triunfo el ex titular de la Secodam y ex diputado federal, Francisco Barrio Terrazas, perdió el PAN el gobierno del estado en las elecciones de 1998, y resultó electo el priísta Patricio Martínez. Si observamos los datos de las entidades consideradas como las más corruptas, el primero y quinto lugar lo ocupan entidades con gobiernos de alternancia: el Distrito Federal, perredista desde 1997 (22.6) y Jalisco (11.6), con gobiernos panistas en los últimos 9 años. Del segundo al cuarto lugar lo ocupan entidades priístas: Estado de México (17.0), Guerrero (13.4) y Puebla

<sup>6</sup> El ICBG se calcula dividiendo el número de veces en los que se dio mordida en los 38 servicios, entre el número total de veces que se utilizaron los 38 servicios, multiplicado por 100.

<sup>7</sup> Roy Campos (2001).

<sup>8</sup> Algunos de los servicios incluidos son: inscripciones escolares, verificación vehicular, venta domiciliaria de agua, recolección de basura, licencias de construcción, etcétera.

Cuadro 1  
Índice de corrupción y buen gobierno por entidad y partido gobernantes

<i>Estado</i>	<i>Gubernatura</i>	<i>Año de elección</i>	<i>Índice de corrupción y buen gobierno</i>	<i>Gubernatura 2003</i>
Campeche	PRI	1997	7.4	PRI
San Luis Potosí	PRI	1997	6.1	PAN
Sonora	PRI	1997	5.7	PRI
Colima	PRI	1997	3.0	PRI
Querétaro	PAN	1997	8.1	PAN
Nuevo León	PAN	1997	7.1	PRI
Puebla	PRI	1998	12.1	
Durango	PRI	1998	8.0	
Veracruz	PRI	1998	8.5	
Sinaloa	PRI	1998	7.9	
Oaxaca	PRI	1998	7.8	
Tamaulipas	PRI	1998	6.7	
Chihuahua	PRI	1998	5.5	
Tlaxcala	PRD	1998	6.6	
Zacatecas	PRD	1998	6.2	
Aguascalientes	PAN	1998	4.5	
Estado de México	PRI	1999	17.0	
Guerrero	PRI	1999	13.4	
Hidalgo	PRI	1999	7.3	
Quintana Roo	PRI	1999	6.3	
Coahuila	PRI	1999	5.0	
Nayarit	PAN-PRD-PT-PRS	1999	6.4	
Baja California Sur	PRD	1999	3.9	
Morelos	PAN	2000	7.7	
Chiapas	PAN-PRD-PT-PVE	2000	6.8	
Tabasco	PRI	2001	8.9	
Michoacán	PRD	2001	10.3	
Yucatán	PAN-PRD-PVE	2001	6.8	
Jalisco	PAN	1995 y 2000	11.6	
Guanajuato	PAN	1995 y 2000	6.0	
D. F.	PRD	1997 y 2000	22.6	
Baja California	PAN	1989 y 1995 y 2000	5.7	
Nacional			20.3	

Fuente: Encuesta nacional de corrupción y buen gobierno, 2001.

(12.1). Llama la atención el lugar destacado que ocupa el gobierno del D.F. Como también lo muestra el cuadro 4 anexo, de las 32 entidades, el Distrito Federal es donde menos temor se tiene a la autoridad para obedecer las leyes y normas. Es la administración más permisiva y corrupta (al momento de la encuesta). Siete años no parecen suficientes para cambiar las prácticas añejas, pero tampoco para un cambio en las percepciones ciudadanas de erradicación de la corrupción en “la ciudad de la esperanza”.

El cuadro 2 confirma que la percepción sobre la corrupción no hace distinciones por tipo de gobierno. En términos generales puede apreciarse que los datos son compartidos. En la columna que corresponde a los niveles bajos del gobierno las cifras son positivas y aumentan conforme se sube en la escala de la burocracia; hasta llegar a los niveles altos donde se concentra la evaluación negativa. Sin embargo, cuando se pregunta acerca de la corrupción “en todos” los niveles, las cifras se elevan considerablemente en algunas entidades. Chihuahua y Colima (estados gobernados por el PRI) ocupan los primeros lugares, mientras que los tres de alternancia que aparecen en primer lugar son Baja California Sur, D.F. y Guanajuato. En todos los casos la percepción ciudadana acerca de la disposición gubernamental para combatir la corrupción es baja, situándose en un promedio de 5.38 (en una escala de 1 a 10).

Los datos de la desconfianza acerca de los gobiernos subnacionales, independientemente del partido que gobierna, se complementan con los que se presentan en el cuadro 3 y que se refieren a la desconfianza como una de las variables centrales de la cultura política nacional. La respuesta negativa es abrumadora: 70.8% de los ciudadanos no confían en sus semejantes. Tanto en estados gobernados por el PRI, PRD o PAN sus ciudadanos comparten el pesimismo. En ninguno de los casos las respuestas positivas se acercan a 40%.

#### DE LA VOLATILIDAD DE LA CULTURA POLÍTICA A MANERA DE CONCLUSIÓN

Hasta hoy sabemos muy poco de los cambios introducidos por los procesos democratizadores en las percepciones políticas de los ciudadanos. Si bien la alternancia en el poder ejecutivo federal es de muy corta data, a nivel estatal ya contamos con

Cuadro 2  
Gobierno y corrupción

Estados gobernados por el PRI	Responsabilidad de acabarla %	Ayuda a combatirla escala (1-10)	En qué nivel considerar que hay más corrupción				Total	
			En bajos	En medios	En altos	En todos		
Chihuahua	23.6	6.26	6.6	5.6	17.7	70.1	100	
Colima	24.7	5.36	5.5	6.8	26.8	60.8	100	
Oaxaca	29.8	5.43	4.5	5.4	40.9	49.2	100	
Coahuila	31.1	5.66	13.3	6.9	36.7	43.1	100	
Hidalgo	32.6	5.85	5.7	11.0	42.2	41.1	100	
Estado de México	35.1	5.16	11.1	10	46.5	32.4	100	
Durango	38.4	2.2	4.94	9.3	8.7	57.4	24.7	100
Campeche	39.6	3.4	5.32	7.3	6.1	42.5	44.1	100
San Luis Potosí	40.6	4.4	5.79	13.0	10.4	47.8	28.8	100
Sonora	42.8	6.6	6.06	11.1	11.1	51.9	25.9	100
Veracruz	43.4	7.2	5.72	6.3	8.3	59.1	26.3	100
Quintana Roo	44.0	7.8	5.38	5.6	14.1	59.2	21.0	100
Puebla	45.2	9.0	4.91	12.9	8.6	52.3	26.2	100
Sinaloa	48.1	11.9	5.70	14.7	11.8	50.2	23.4	100
Tabasco	49.0	12.8	5.56	12.6	6.6	53.1	27.6	100
Tamaulipas	49.0	12.8	6.04	10.1	10.9	55.4	23.6	100
Guerrero	50.4	14.2	5.06	5.0	7.5	49.0	38.5	100

  

Estados con alternancia	Responsabilidad de acabarla %	Ayuda a combatirla escala (1-10)	En qué nivel considerar que hay más corrupción				Total	
			En bajos	En medios	En altos	En todos		
Baja California Sur	17.9	5.70	3.0	4.4	26.1	66.5	100	
D.F.	18.5	4.32	3.0	7.9	27.0	62.1	100	
Guanajuato	27.7	5.46	6.7	3.9	26.5	63.0	100	
Tlaxcala	32.1	5.03	7.8	12.6	45.0	34.6	100	
Querétaro	32.4	5.80	8.2	11.5	45.2	35.1	100	
Jalisco	32.9	5.48	10.3	12	36.9	40.7	100	
Chiapas	33.8	5.71	11.9	11.5	40.7	35.9	100	
Yucatán	35.7	5.67	4.3	5.2	37.2	53.4	100	
Baja California	39.2	3.0	5.90	7.5	10.4	35.2	46.9	100
Aguascalientes	39.3	3.1	5.27	9.4	9.2	51.7	29.8	100
Nuevo León	41.4	5.2	5.62	9.2	12.8	47.6	30.4	100
Michoacán	43.5	7.3	4.96	12.0	9.9	48.8	29.3	100
Zacatecas	44.9	8.7	5.78	9.2	13.1	54.1	23.6	100
Morelos	46.5	10.3	5.36	10.1	12.0	51.0	26.8	100
Nayarit	46.5	10.3	6.01	12.2	14.1	54.6	19.0	100
Nacional	36.2	5.38	8.7	9.3	43.3	38.7	100	

Fuente: Encuesta nacional de corrupción y buen gobierno, 2001.

Cuadro 3  
En términos generales, ¿diría que se puede o no confiar en la mayoría de las personas?

Estados gobernados por el PRI	Sí	Diferencia nacional	No	Total
Guerrero	17.1		82.9	100
Colima	22.8		77.2	100
Hidalgo	23.3		76.7	100
Sinaloa	23.5		76.5	100
Campeche	23.7		76.3	100
Oaxaca	24.0		76.0	100
Chihuahua	24.7		75.3	100
Puebla	24.9		75.1	100
Tabasco	25.0		75.0	100
Coahuila	25.2		74.8	100
Durango	26.6		73.4	100
San Luis Potosí	28.5		71.5	100
Veracruz	29.9	0.7	70.1	100
Estado de México	31.3	2.1	68.7	100
Sonora	34.2	5.0	65.8	100
Tamaulipas	36.3	7.1	63.7	100
Quintana Roo	36.4	7.2	63.6	100

  

Estados con alternancia en la gubernatura	Sí	Diferencia nacional	No	Total
Baja California	14.6		85.4	100
Morelos	23.3		76.7	100
Chiapas	25.0		75.0	100
Yucatán	25.1		74.9	100
Michoacán	25.2		74.8	100
Guanajuato	27.8		72.2	100
Tlaxcala	28.1		71.9	100
Nayarit	28.6		71.4	100
Zacatecas	30.6	1.4	69.4	100
Baja California Sur	31.6	2.4	68.4	100
Jalisco	32.2	3.0	67.8	100
Aguascalientes	35.4	6.2	64.6	100
D.F.	36.5	7.3	63.5	100
Querétaro	38.9	9.7	61.1	100
Nuevo León	38.9	9.7	61.1	100
Nacional	29.2		70.8	100

Fuente: Encuesta nacional de corrupción y buen gobierno, 2001.



Cuadro 4  
¿Por qué respeta y obedece las leyes y normas?

Estados gobernados por el PRI	Por temor a la autoridad	Diferencia con el promedio nacional	Cumplir la ley no beneficia ni ordena la sociedad	Para no ser mal visto o por sentimiento de culpa	Es un deber respetar los derechos ajenos	Permite vivir en paz	Reflejan principios morales comunes	Total
Sonora	5.0		36.4	2.5	29.6	12.9	13.7	100
Coahuila	7.1		55.3	1.8	10.5	14.9	10.5	100
Oaxaca	7.2		35.6	1.8	20.7	26.3	8.4	100
Sinaloa	7.3		34.4	2.0	25.3	20.7	10.3	100
Durango	8.4		22.3	2.8	37.2	20.6	8.7	100
Hidalgo	8.9		28.5	2.9	24.9	19.5	15.4	100
Colima	10.3		29.8	1.6	21.7	26.0	10.7	100
Veracruz	10.5		31.6	2.7	22.5	16.9	15.8	100
Puebla	10.6		40.4	2.7	27.3	11.0	8.0	100
Quintana Roo	10.7		34.8	1.1	23.5	16.0	13.9	100
Estado de México	11.8	0.8	34.8	2.1	21.7	14.7	14.9	100
Campeche	12.1	1.1	40.8	3.6	18.4	21.8	3.4	100
San Luis Potosí	14.2	3.2	24.5	1.4	33.0	16.8	10.1	100
Chihuahua	14.7	3.7	50.5	2.5	7.3	14.8	10.2	100
Tabasco	15.7	4.7	29.9	3.0	21.8	17.8	11.8	100
Tamaulipas	17.7	6.7	34.9	1.1	23.4	10.8	12.1	100
Guerrero	18.6	7.6	26.4	6.4	26.6	17.2	4.8	100
<i>Estados con alternancia en la gubernatura</i>								
D.F.	4.1		47.4	3.8	19.8	9.4	15.5	100
Tlaxcala	5.8		31.7	3.3	24.9	18.5	15.8	100
Nayarit	7.1		26.2	1.8	29.8	20.3	14.8	100
Aguascalientes	7.3		37.5	1.6	26.5	15.9	11.1	100
Morelos	7.9		39.2	1.7	21.2	17.0	13.0	100
Querétaro	8.9		41.3	3.0	22.0	12.5	12.3	100
Jalisco	9.3		37.1	2.9	20.8	18.7	11.2	100
Yucatán	9.6		38.8	3.1	26.2	16.3	6.0	100
Baja California	11.0	0.0	55.0	1.5	14.4	10.6	7.5	100
Zacatecas	11.1	0.1	23.9	0.6	29.2	21.7	13.6	100
Michoacán	12.2	1.2	33.2	2.6	23.4	20.4	8.2	100
Baja California Sur	12.7	1.7	38.5	1.1	18.6	15.3	13.9	100
Guanajuato	14.0	3.0	31.7	1.4	26.9	13.1	12.8	100
Nuevo León	14.7	3.7	43.7	1.2	19.2	11.9	9.2	100
Chiapas	28.5	17.5	32.0	4.2	14.7	13.8	6.9	100
Nacional	11.0		37.0	2.5	22.2	15.4	11.8	100

Fuente: Encuesta nacional de corrupción y buen gobierno, 2001.

17 años de experiencia, pero con muy poco conocimiento al respecto. Con los datos existentes parece haber una gran disociación entre la percepción de los cambios introducidos en términos de corrupción y buen gobierno y lo que realmente se ha hecho respecto a otras administraciones. Si a eso agregamos que la evaluación que la ciudadanía hace de la gestión pública emanada de la alternancia no tiene traducción unívoca con el comportamiento electoral, estamos ante una verdadera esquizofrenia política.

Pongamos ejemplos: la empresa Consulta Mitofsky reporta que en la misma fecha en que se aplicó la Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2001, y en la que se ubica al Distrito Federal como la entidad más corrupta, el porcentaje de capitalinos que estaban de acuerdo con el desempeño de Andrés Manuel López Obrador era altísimo (73.2%).<sup>9</sup> En Baja California, las evaluaciones al gobierno saliente de Alejandro González Alcocer revelaban que nunca un gobernante, de ningún partido político, había recibido tan malas notas por parte de la ciudadanía; sin embargo, en las elecciones del 8 de julio de 2001 triunfó holgadamente el candidato panista a la gubernatura Eugenio Elorduy Walther.

Para algunos autores, la teoría del voto retrospectivo es aplicable a la realidad mexicana. Es decir, la gente expresa su evaluación de la administración pública a través del voto por los candidatos del mismo partido u otros diferentes. Si esto fuera así, Andrés Manuel López Obrador no hubiera triunfado en las elecciones del 2 de julio de 2000. El Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) publicó, en junio de 2000, los resultados de una encuesta de evaluación de la labor de Rosario Robles: solamente 38% aprobaba su gobierno, a diferencia de un 64% de aprobación que recibiera Cuauhtémoc Cárdenas en diciembre de 1997.<sup>10</sup> Pero sin duda el caso más interesante ha sido el de Chihuahua, donde el PRI recuperó el poder en 1998. Según una autora, el gobierno saliente de Francisco Barrio fue evaluado positivamente en prácticamente todos los rubros, salvo en uno: el de la seguridad pública; eso le brinda la justificación para explicar el triunfo de Patricio Martínez,<sup>11</sup> candidato que

<sup>9</sup> Puede verse Consulta Mitofsky (2002), *Encuesta de evaluación del gobierno del Distrito Federal*, versión electrónica, septiembre.

<sup>10</sup> Centro de Estudios de Opinión Pública (2000), "Monitoreo de opinión en el Distrito Federal. Evaluación del gobierno", publicado en *Este País*, junio, pp. 52-54.

<sup>11</sup> Yemile Mizrahi (2000), "La alternancia política en Chihuahua: el regreso del PRI", en Víctor Alejandro Espinoza Valle (coord.), *Alternancia y transición política. ¿Cómo gobierna la oposición en México?*, El Colegio de la Frontera Norte-Plaza y Valdés, México, pp. 185-205.

obtuvo la gubernatura, paradójicamente, con base en una campaña a favor de la continuidad y no de la ruptura con el programa de gobierno de su antecesor. El candidato priísta fue considerado más panista que su contrincante. Como afirma otro autor: “[en] México la relación entre el buen o mal desempeño gubernamental y el éxito o fracaso electoral tiene un margen que impide establecer una ecuación exacta, porque no existe la reelección, por lo cual se necesita introducir otras variables que puedan explicar por qué un gobierno bien evaluado puede perder las elecciones ya que, a final de cuentas, la ciudadanía que decide el resultado de una elección es la franja del voto volátil que puede cambiar de partido, de acuerdo con la evaluación de criterios como el candidato y la misma trama de la campaña electoral”.<sup>12</sup>

Termino como inicié: me parece que los gobiernos de alternancia no han modificado sustancialmente los valores de la cultura política mexicana. No me queda claro si es por falta de tiempo, aunque sabemos que la cultura política no cambia de la noche a la mañana y obedece a factores que no pueden modificarse en función de sexenios o trienios. Una reciente investigación sobre cultura juvenil y valores políticos realizada en la entidad donde se produjo la alternancia en 1989,<sup>13</sup> muestra resultados que no dejan de ser sorprendentes y que abonan la tesis aquí esbozada: los valores, normas y percepciones de los jóvenes de entre 15 y 29 años no han variado un ápice en función de su experiencia con los gobiernos panistas. No muestran mayor interés en conocer o participar en los temas y asuntos públicos de carácter político. Es más, parece hasta enorgulleclos el alejamiento y pérdida de interés en la problemática electoral y gubernamental. Viven de espaldas a la política. Su mundo está en otra parte. El problema es que representan 27.48% de la población.<sup>14</sup>

A lo mejor le exigimos demasiado a nuestra democracia imberbe.

<sup>12</sup> Alberto Aziz Nassif (2000: 12-13).

<sup>13</sup> Carlos Alejandro Monsiváis Carrillo (2002).

<sup>14</sup> Es decir, 683 580 de una población total de 2 487 367, según INEGI (2000), *XII Censo General de Población y Vivienda*, México.

## Centros de Servicios Empresariales y la competitividad de un *cluster* industrial: el caso de la industria de prendas de vestir de Moroleón y Uriangato, Guanajuato

Ulrik Vangstrup

Copenhagen Business School  
Department of Intercultural Communication and Management

Actualmente, el ciclo de vida de los productos industriales es cada vez más corto, el tiempo disponible para su desarrollo ha disminuido y los márgenes de ganancia son menores; en fin, las empresas, incluso las pequeñas, están expuestas a una competencia más intensa y global. Hay por lo mismo retos enormes para la industria mexicana, sobre todo para la gran mayoría de negocios que se caracterizan por ser empresas familiares. Para defender su posición, la empresa familiar no tiene otra alternativa que mejorar su competitividad lo cual incluye la innovación de sus productos, su organización y tecnología.

Una empresa familiar –que produce bienes industriales como prendas de vestir, zapatos o artesanías– puede optimizar su competitividad formando parte de aglomeraciones geográficas, los llamados *clusters* industriales. A pesar de las ventajas competitivas, un *cluster* podrá llegar a encontrarse en una situación crítica –por motivos tanto de su organización industrial interna como de presión externa. En este capítulo investigamos el papel de los Centros de Servicios Empresariales (CSE) para contrarrestar situaciones de baja competitividad de un *cluster* específico ubicado en los municipios de Moroleón y Uriangato, Guanajuato.

Hace 10 años hicimos otro estudio de la industria de Moroleón (Vangstrup, 1995) y desde entonces ha sufrido altibajos. En 2005 el *cluster* de Moroleón y Uriangato se encuentra fuertemente golpeado por cambios de origen extralocal, tanto nacionales como globales, pero también es víctima de una peculiar organización